



OFICINA DE INFORMACIÓN

Declaración de Mariano Rajoy

Madrid, 15 de octubre de 2009



OFICINA DE INFORMACIÓN

La trama Gürtel no tiene nada que ver con la estructura orgánica del PP.

Es cierto que algunos de los responsables de esta trama, que ahora están detenidos, fueron durante años proveedores de servicios para esta casa: agencias de viaje, preparación de escenarios para actos públicos, etc.

Las relaciones estrictamente comerciales que el PP mantuvo con ellos fueron absolutamente legales y sujetas a fiscalización pública.

Esta colaboración comercial se rompió en el año 2004, a instancias nuestras, por razones de pérdida de confianza. Detectamos que algunos de estos proveedores estaban utilizando su relación con el PP y el nombre de nuestro partido en beneficio propio. Por eso decidimos cortar con ellos.

En febrero de este año, tras unas actuaciones judiciales filtradas a los medios de comunicación, supimos de la existencia esa trama y también de su relación con algunos miembros del Partido Popular.

Es en ese momento cuando conocimos que las empresas ahora investigadas mantuvieron o iniciaron cierta actividad profesional con algunas comunidades autónomas y ayuntamientos. Bien es verdad que lo hicieron, o bien ocultando su auténtica identidad, o bien a través de contactos no institucionales sino estrictamente personales.

No le corresponde al Partido Popular sustituir la tarea de los jueces. Ni siquiera prejuzgar las posibles responsabilidades penales de las personas



OFICINA DE INFORMACIÓN

afectadas. Lo único que deseamos es que la Administración de Justicia actúe de manera rápida e independiente.

Lo que le corresponde al PP es dar una respuesta política ante estos hechos. Una respuesta que no puede ser ni arbitraria ni precipitada ni injusta. Una respuesta política adecuada a cada caso porque las generalizaciones son siempre injustas. Hay personas imputadas por razones muy diferentes, otras son simplemente citadas y de muchas otras, lo único que conocemos son transcripciones de conversaciones.

El Partido Popular a medida que ha ido conociendo los datos sobre este asunto ha actuado de conformidad con el criterio antes señalado. Ha dado una respuesta política ajustada a cada caso concreto.

Hay personas que han dimitido o han sido separadas de sus responsabilidades en el Partido. Otras han sido suspendidas de militancia o han dejado sus cargos en distintas administraciones públicas. Todo esto sin menoscabo de la presunción de inocencia hasta que los tribunales dicten sentencia.

Creo sinceramente que en nuestra respuesta política a este asunto hemos marcado un nivel de exigencia y de responsabilidad sin parangón en la vida pública española.

Todos los ciudadanos, pero especialmente aquellos que nos han dado su confianza pueden tener la tranquilidad de que, como Presidente del Partido Popular, no voy a consentir en modo alguno conductas que puedan



OFICINA DE INFORMACIÓN

avergonzar a ningún votante de nuestro partido, independientemente de que estas sean o no sancionables desde el punto de vista penal.

Creo en la ejemplaridad en la vida pública. Creo que los que voluntariamente formamos parte de un partido político y mucho más quienes ostentamos puestos de representación popular, tenemos la obligación, no sólo de cumplir la ley sino de ser ejemplares en nuestra ejecutoria.

El PP está compuesto por más de 700.000 militantes, en su inmensa mayoría personas honradas y abnegadas que se entregan desinteresadamente en la defensa de sus ideales. Esa es la auténtica imagen del Partido Popular, la que se ha labrado en una dignísima trayectoria de presencia en la vida pública española y no la de unos pocos que no han sabido estar a la altura de la exigencia que suponen nuestra historia y nuestras siglas.

Esta ejemplaridad de nuestra conducta viene dictada por el respeto a nuestros militantes y cargos públicos. También por nuestro compromiso ante el conjunto de la sociedad española en un momento en el que sufrimos el peor gobierno de nuestra reciente historia democrática.

En la actual situación es imprescindible la existencia de una alternativa que genere confianza y es nuestra obligación adoptar todas las medidas necesarias para fortalecerla.



OFICINA DE INFORMACIÓN

Por ello he decidido proponer al próximo Comité Ejecutivo Nacional un Código de Buenas Prácticas que refuerce la transparencia de nuestro sistema de gestión interna mucho más allá de lo legalmente exigido.

Insisto, todas nuestras cuentas son legales y han sido fiscalizadas convenientemente por el Tribunal de Cuentas. No existe la menor sospecha sobre las mismas pero queremos mejorar la transparencia de nuestra gestión.

Independientemente de las medidas que hemos adoptado o podamos adoptar en el futuro y de las responsabilidades en las que hayan podido incurrir algunos miembros del Partido Popular, quiero denunciar que en este asunto ha habido una clara manipulación política por parte del gobierno.

Las interferencias políticas se vieron desde el primer día, con la cacería del juez instructor, un entonces ministro del gobierno y el máximo responsable de la investigación policial y han continuado hasta el momento actual.

El más claro exponente han sido las instrucciones dictadas desde Costa Rica por la Vicepresidenta Primera del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, al Fiscal General del Estado para que recurriera el sobreseimiento de la causa contra el Presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otras personas el mismo día en que se dio a conocer el auto de archivo.



OFICINA DE INFORMACIÓN

Después hemos conocido, aún con más escándalo, el intento de esa misma Fiscalía de eliminar del sumario las grabaciones que beneficiaban y demostraban la inocencia de Francisco Camps, y de hecho, que no fueron conocidas por el TSJCV.

No han sido estos los únicos comportamientos incalificables. A través de una campaña sistemática y programada de filtraciones fraudulentas, parciales e interesadas se ha pretendido crear la sensación de que a quien se encausa no es a esta o aquella persona sino al Partido Popular en su conjunto.

Para ello se ha violado sistemáticamente el secreto sumarial sobre informes policiales y se han mezclado con un arsenal de medias verdades y testimonios sobrevalorados para organizar un juicio paralelo con el ánimo de influir en la libre actuación de la justicia.

Se ha querido dañar al Partido Popular, como se ha querido dañar a militantes de este partido que, en virtud de las filtraciones del sumario, se han visto sometidos a escándalo público sin siquiera figurar como imputados y por tanto sin posibilidad de defensa.

A modo de conclusión y resumen:

- El Partido Popular es el principal perjudicado por estos acontecimientos.
- Todas nuestras cuentas son legales y han sido fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. A pesar de ello adoptaremos medidas para



OFICINA DE INFORMACIÓN

mejorar la transparencia de nuestra gestión y eliminar cualquier riesgo de arbitrariedad o favoritismo.

- No hay trama organizada en el seno del partido. En todo caso estamos ante una trama externa que ha intentado lucrarse de la imagen y de la implantación territorial de esta organización. La conducta reprobable de algún militante, de confirmarse, sería exclusivamente personal y no puede comprometer la honorabilidad del conjunto del Partido Popular
- Aquellos militantes del Partido Popular que están imputados, están suspendidos de militancia o han sido apartados de sus cargos de responsabilidad. El Partido Popular tiene un claro compromiso de ejemplaridad, por lo que no amparará nunca conductas reprobables aunque éstas no tengan carácter delictivo.
- Es indignante y antidemocrático el uso sectario y partidista que se ha hecho de instituciones del Estado por parte del gobierno con el fin de ofrecer una imagen distorsionada e irreal de esta formación política.
- En cualquier caso, les aseguro que el Partido Popular va a cumplir sus obligaciones con los españoles. No nos vamos a distraer, y no lo hemos hecho, de lo que constituyen las auténticas prioridades de los ciudadanos, ni vamos a permitir que el gobierno utilice este asunto como parapeto para eludir sus graves responsabilidades. Todos ustedes saben que España está atravesando por una gravísima crisis económica. Todos ustedes saben que la política económica que está llevando a cabo el gobierno de España es letal si queremos que en nuestro país, como ya está ocurriendo en otros países de la Unión



OFICINA DE INFORMACIÓN

Europea, se inicie pronto la recuperación. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que se ha presentado a las Cortes Generales, es un proyecto que no sirve, antes al contrario, para la recuperación económica de nuestro país. Hoy hemos conocido el informe de la Comisión Europea, que advierte claramente al gobierno de España y lo firma el señor Almunia, de algo de lo que llevamos advirtiendo durante mucho tiempo, que hay que recortar el gasto público, que en estos Presupuestos va subir un 17%, y que, de seguir en esta situación, se pueden poner en peligro pilares básicos de nuestro Estado de Bienestar como la sanidad y la pensiones.

- Conscientes como somos de nuestra responsabilidad ante la sociedad no ahorraremos ningún esfuerzo para garantizar a los españoles el derecho que les asiste a contar con una alternativa real que es tanto como garantizarles su derecho a la esperanza.